



**A LA SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCÍA EN SEVILLA
(SECCIÓN TERCERA)**

P. ORDINARIO: 60/2010-Negociado H

Don JAIME COX MEANA, Procurador de los Tribunales, en nombre y representación de la **FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE NATURISMO** –en cuyo nombre actúa a su vez su Presidente **DOROTEO ISMAEL RODRIGO RODRÍGUEZ-**, representación acreditada según consta en los autos, ante la Sala comparezco y, como mejor proceda en Derecho, **DIGO:**

Recibida providencia de fecha 7 de julio de 2010, notificada a esta parte el día 20 de julio del corriente, por la que se nos da traslado de la contestación de nuestro recurso por el Procurador D. Fernando García Paul en representación del Ayuntamiento de Cádiz, y se nos emplaza para que dentro del plazo de 10 días formulemos Conclusiones, procedemos en cumplimiento de dicho proveído a manifestar las siguientes:

CONCLUSIONES

PRIMERA.- En cuanto al contenido del apartado “HECHOS”

Estamos plenamente de acuerdo en que *los planteamientos más o menos dogmáticos o fundamentalistas o consideraciones más o menos moralistas deben quedar al margen del debate*. Precisamente la base principal de la demanda interpuesta contra la Ordenanza de playas se basa en que las limitaciones en la vestimenta de los ciudadanos a la hora de disfrutar de las playas sólo pueden entenderse en base a conceptos morales subjetivos, en los que las leyes, y en concreto las ordenanzas, no pueden entrar. Ha sido, por ello, absolutamente necesario recordar la evolución histórica que ha llevado a nuestros legisladores a abolir el delito de escándalo público que ahora pretende restaurar el Ayuntamiento de Cádiz.

Los motivos de impugnación reconocidos por el demandado se simplifican en exceso en su enunciado y termina señalando que el contenido de la ordenanza



responde al sentir de los ciudadanos que eligieron al Consistorio, ocultando que esta prohibición no figuraba en su programa electoral, lo que implica una más que peligrosa y rechazable interpretación de la democracia en cuanto facultad para hacer lo que se quiera una vez elegidos en las urnas.

SEGUNDA.- En cuanto al apartado de Fundamentos de Derecho

I).- Lamentamos que el Ayuntamiento de Cádiz, o su representante, no alcance a ver cómo los puntos recurridos de la Ordenanza violan el artículo 14 de la Constitución Española (CE, en adelante). Es evidente que no lo ve, ya que en las dos ocasiones que lo cita ignora o desconoce parte del artículo 14, citando *la igualdad ante la ley, la libertad religiosa, el sexo, la raza y cualquier otra consideración o circunstancia personal*. Es decir, ignorando en sus sucesivas citas la **libertad de Opinión**, que también se recoge en el 14.

Pero, sin duda, lo que más nos sorprende es la afirmación de que la filosofía Naturista o nudista no “pueda radicarse en el ámbito de las creencias y convicciones más profundas del alma humana”. Es decir, se nos niega la cualidad de movimiento y, ya de paso, se niega que cualquier creencia o convicción u opinión pueda ser defendida en el ámbito del artículo 14 de la CE, si no está “en lo más profundo del alma humana”. En una clara actitud de desprecio se nos relega a una mera “práctica”, ignorando además la aclaración realizada ya en la demanda de lo inconveniente de esta palabra para describir una *forma de estar y de ser*, siendo, en todo, caso la práctica el hecho de vestirse. El párrafo, en el colmo de la ofensa y del desprecio hacia los millones de personas que militan en grupos no religiosos y no políticos, termina diciendo “la llamada Federación Naturista en modo alguno puede estar considerada asociación política o confesión religiosa alguna”, demostrando una vez más que los únicos derechos que reconoce el representante del ayuntamiento son los de los grupos religiosos y/o políticos, quedando excluidos todos los demás.

Le hubiera bastado a la recurrida consultar un diccionario para enterarse de que el nudismo es una ideología que considera positiva la desnudez propia y de los demás, que sirve para su crecimiento personal y social y no tiene carácter sexual, y que esta ideología o filosofía la comparten más de veinte millones de nudistas censados en Europa en diversas asociaciones, clubs o centros más un número indeterminado pero mucho mayor de nudistas no asociados. La forma de



expresión de dicha ideología es la desnudez en público, bien sea en zonas tradicionalmente nudistas o, como está pasando ya en muchos países, fuera de los “guetos” a los que la intolerancia de algunos sectores de la sociedad los había condenado.

La discriminación sucede al impedir el desarrollo del artículo 16.1 de la CE que garantiza “la libertad **ideológica**, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades **sin más limitación** [así en singular], **en sus manifestaciones**, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la Ley”, entendiéndose, tal y como señala el Tribunal Constitucional, **las situaciones en que se ponga en peligro la integridad física de las personas o de los bienes protegidos constitucionalmente**. Y también en el artículo 19 que dice que “los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional”, además del artículo 20.1.a de la C.E., que reconoce y protege el derecho “a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.”

Los ejemplos de prohibiciones en aras de facilitar la convivencia **citados por el Ayuntamiento** (*jugar al fútbol, volar cometas y usar champú en las duchas*) vienen a confirmar, una vez más, lo que decimos: se trata de situaciones que ponen en peligro **la integridad física** de las personas que toman el sol, -el fútbol y volar cometas pueden derivar en golpes o accidentes sobre los no participantes- o la del **medio ambiente** (uso de jabón en las duchas), y es más, ambos se enmarcan perfectamente en las facultades que el Estado delega en los Ayuntamientos a través de la Ley de Costas.

Se termina afirmando que “*cuando alguien desee practicar o practique el nudismo igualmente deseará practicarlo con la mayor tranquilidad, sin verse alterado por actividades de otros en mayor o menor grado de incomodidad*”. En efecto, toda persona que disfrute de un baño solar en la playa, independientemente de que use o no bañador, o una o dos partes del mismo, deseará estar tranquila en cuanto a juegos de balón o de cometas se refiere, y en cuanto a cualquier acoso por parte de terceros que no les guste el tipo de ropa que usen para tomar el sol o el color de pelo que luzcan.

Por ello estamos de acuerdo con lo que se afirma en el párrafo siguiente: “*cada ciudadano tendrá su consideración de lo que a él le altera o no sus límites*”



de convivencia o comodidad” y por ello el Ayuntamiento no debe regular más allá de lo que altere el orden público protegido por ley que, como ha quedado claro, se produce cuando se pone en peligro la integridad **física** de las personas y del medio ambiente, y **no cuando se pone en peligro los conceptos morales de unos u otros**.

II).- El demandado pretende en el apartado II de los fundamentos sustantivos que: es posible regular aspectos de los derechos fundamentales no necesarios de los mismos mediante Ordenanzas, pero tal y como indican sus propias citas se refiere a aspectos accesorios, **no a prohibiciones de derechos** claramente establecidos mediante una despenalización activa, por lo que este apartado carece de aplicación.

III).- En el punto III por fin entramos en la **esencia de la cuestión**. Parece claro que tras todo el escrito de contestación planea o subyace la idea de que no siempre hay que aplicar el principio de Jerarquía de las leyes, y por ende el de Legalidad -o, dicho de otro modo, mantienen que puede no aplicarse en el caso que nos ocupa-, sino que en caso de ausencia de legislación superior debe aplicarse con carácter de complementariedad, el de **competencia**. Esto traducido, aunque la recurrida trate de disimularlo, significa que entienden que hay un "*vacío legal*", y que la falta de legislación a nivel Estatal o de la Comunidad les permite actuar, como lo hacen en otros temas de seguridad e higiene citados.

Pero es absolutamente falso que haya tal vacío, ya que **SÍ** existe una Ley superior. Los actos legislativos no sólo son los positivos -los que se plasman en leyes-, sino TAMBIÉN los negativos, los que se plasman en ABOLICIÓN y SUPRESIÓN de leyes. De ahí que en nuestra demanda comenzáramos por un apartado de antecedentes históricos. El legislador NO SE HA OLVIDADO de legislar en este apartado, sino que lo ha hecho SUPRIMIENDO, lo cual es un acto legislativo, o/y ABOLIENDO el delito de escándalo del CP en 1988. Y no lo ha hecho de una manera caprichosa o de casualidad, sino como respuesta precisamente a la indefensión en la que se hallaban los ciudadanos, que según el Juzgado que les tocara, o según el Ayuntamiento en el que estaba situada la playa, podían terminar con diversas multas o incluso penas privativas de libertad. En otras palabras, la supresión del delito de escándalo público y las consecuentes derivadas de esta abolición como la retirada del encargo de "policía de moralidad",



que antes poseían los Ayuntamientos, se hizo **PRECISAMENTE** y específicamente para **IMPEDIR** que los Ayuntamientos legislaran la vestimenta, y concretamente la carencia de la misma en las playas de sus municipios. Se hizo para evitar que los Ayuntamientos, como el de Cádiz, aprobaran Ordenanzas como la que ahora recurrimos, y para lograr que todos los Juzgados supieran que la desnudez humana **NO es criminalizable** en nuestro Ordenamiento Jurídico. Así pues, es evidente y queda demostrado que, en este caso, debe aplicarse el principio de jerarquía de las leyes, ya que el legislativo **sí se ha pronunciado** y con claridad absoluta sobre el escándalo y sobre la finalización de la policía de moralidad en 1988, y se ha pronunciado retirando las leyes y reglamentos que regulaban la vestimenta, terminando así con las playas antes llamadas "nudistas" y resolviendo a la vez un posible problema de privatización, de facto, de algunas playas claramente contrario a su definición constitucional.

A modo de ejemplo, la pena de muerte y los tratos inhumanos o degradantes se abolieron con la llegada de la democracia. Una vez abolidos ya no aparecen en el CP. También podemos recordar otros ejemplos como la blasfemia, etc., en una lista casi interminable. El Ayuntamiento de Cádiz, apoyándose en el principio de complementariedad, reintroduciría en su Ordenanza de civismo la pena de muerte o la blasfemia al no haber referencia alguna a ellas en el CP.

Compartimos, pues, con el demandado su cita del profesor Parejo Alfonso "respetando la Ley", y suscribimos sus palabras sobre el derecho comunitario "que admite que el ordenamiento local actúe reforzando los niveles de protección superiores". Es por ello que ya indicábamos en la demanda que "si el Ayuntamiento de Cádiz desea intervenir en la actividad de los ciudadanos sobre la regulación de ropa en las playas, lo que debe hacer es informarles de que es una más de sus libertades el elegir su indumentaria, especialmente en las playas", reforzando así el ordenamiento superior (la abolición expresa del delito), como ya han hecho algunos Ayuntamientos de nuestra geografía citados.

Nos alegramos de que la recurrida traiga a colación el artículo 55 del TRRL en el que se indica que "en ningún caso contendrán las Ordenanzas o reglamentos preceptos opuestos a las leyes" y que "es posible la emisión de reglamentos independientes tanto en el aspecto organizativo como allí donde no exista una reserva de ley constitucionalmente establecida", ya que, como se ha



demostrado, esta Ordenanza se opone a la abolición del delito moral del escándalo público y a la retirada de la función de policía de moralidad; y ya que la propia Constitución recoge que el desarrollo o limitación de los derechos recogidos en el Capítulo II del Título Primero ha de hacerse mediante una Ley Orgánica y nunca mediante una norma local.

La defensa de la argumentación contraria se explaya citando artículos y sentencias sobre la autonomía local que son ajenos al tema que se dirime aquí. Y por tanto, los obviamos en aras de no perder ni hacer perder el tiempo a este alto Tribunal -obviedades como que el artículo 84 de la LBRL les permite hacer Ordenanzas y Bandos-, muchos de los cuales se pueden leer incluso en sentido contrario al que se utilizan, como cuando se cita con muy poca fortuna el 56 del decreto 18/2006 del 24 de enero “El uso común general de los bienes de dominio público se ejercerá libremente con arreglo a su naturaleza [...] debiendo las entidades locales remover los obstáculos que impidan o dificulten este uso”. Es obvio que el uso general de las playas es el de “estar”, como señala la Ley de Costas, y de disfrutar del sol y el agua, para los cuales no es en absoluto preciso el uso de ninguna prenda. Las entidades locales deberán remover los obstáculos que impidan o dificulten este uso. Una vez más estamos de acuerdo.

La larga cita del TSJ de Cataluña está totalmente fuera de lugar en el escrito de contestación. No hay mayor coincidencia que la de tratarse de un recurso contra una Ordenanza. El TSJC sentencia sobre competencias en cuanto a “originar desórdenes graves en las vías, o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”. A no ser que se trate de insinuar que la presencia de familias o personas sin bañador origina o pueden originar daños a los bienes de uso público. Entendemos que un nudista **no altera el orden público**, tal y como se ha visto en varios casos, sino que son otros, aquellos que consideran que sus convicciones son más importantes que los Derechos Fundamentales y que la misma democracia, base de nuestra sociedad, los que, en raras ocasiones, han alterado el orden público. Sin embargo, contra estos no suele haber actuaciones y sí contra los nudistas.

IV).- De nuevo insiste la recurrida, en su apartado IV, en la no validez del “principio de legalidad” (25 de la CE), olvidando de nuevo que sí existe una regulación de la desnudez en nuestro Ordenamiento Jurídico, que no nos



encontramos ante un vacío legal. El cuerpo humano dejó de ser objeto de criminalización legal mediante el acto positivo de la abolición del delito de escándalo mediante Ley Orgánica. El legislador se limitó a establecer como bien protegido por ley la **indemnidad sexual del menor**, tal y como ya hemos recordado en las CONCLUSIONES de nuestra demanda. Por ello, de nuevo, estamos de acuerdo con la cita referida de contrario: “tal tipificación no podrá hacerse si anteriormente se ha efectuado por ley Estatal o Autonómica. En cualquier caso, al llevar a cabo la tipificación no pueden aplicarse preceptos contrarios a las leyes” (STS del 25 de mayo de 2004). Y aquí incluso se da, además de la reserva de Ley positiva, también la reserva negativa, que parece defenderse de contrario.

Y una vez más se entra en ejemplos como la tenencia y circulación de animales, que al igual que los citados (fútbol, vuelo de cometas, jabón en las duchas) **sí pueden incidir en la seguridad e integridad física, higiénica o en el medio ambiente de las playas.**

V).- Finalmente en el apartado V de la contestación, se ignora la eliminación explícita de la función de policía de moralidad, que se incluía en la anterior Ley de Costas con el objetivo inequívoco de poder reprimir a los bañistas ‘indecorosos’, y que lógicamente no incluye la actual Ley de Costas. La recurrida ignora este acto de nuevo “positivo” de eliminar una potestad que figuraba en la anterior Ley de Costas, y se pone a discutir algo que no está en cuestión, al menos en esta demanda.

El objeto de nuestra demanda no pretende discutir la mayor o menor potestad de los Ayuntamientos sobre sus Costas, aunque es evidente que no es tan importante como se pretende defender. La demanda no entra ni siquiera en qué potestades tiene el Ayuntamiento sobre las playas, ni tampoco en todas las que no tiene. La demanda sólo deja claro que **la competencia de “policía de moralidad” NO LA TIENE.** Y no la tiene, porque la tuvo y se le ha quitado. Y se le ha quitado, porque ningún poder de nuestro Estado la tiene una vez se abolió el delito de escándalo. Y se abolió precisamente a raíz de problemas de acoso a la desnudez de los 80 en nuestras playas. Por tanto, todas las disquisiciones de contrario en torno a sus potestades sobre las playas están fuera de lugar en esta demanda, aunque puedan aprovecharse o ya se hayan aprovechado para otras.



TERCERA.- En cuanto a la PRUEBA obrante en las actuaciones

Al ser una cuestión jurídica no se ha propuesto prueba distinta que la documental que obra en los autos, y que se aportó con el escrito de demanda, **no habiendo sido impugnada de contrario**, dato éste que deseamos subrayar. Por ello hemos de concluir que las argumentaciones basadas en dichos documentos se consideran admitidas por la parte contraria.

En base a la documental aportada que demuestra el gran interés suscitado en los medios de comunicación es claro que los intereses que estamos defendiendo no sólo afectan a un colectivo menor, como se ha dicho de contrario, sino que se trata de una sentencia de vital importancia para el futuro de convivencia en libertad de todos los ciudadanos. Es por lo que insistimos de nuevo en la importancia y consecuencias jurídicas ulteriores de la sentencia que se dicte.

Si el Tribunal, en uso de su facultad de decisión de los intereses en conflicto sometidos a su control, se pronunciara en contra de los argumentos dados por el Ayuntamiento, todo volvería a la normalidad. Normalidad que ha sido quebrantada con la aprobación de la Ordenanza Municipal en los puntos discutidos.

Se harán declaraciones como las que hizo el Alcalde de Getxo cuando fue obligado a retirar su Ordenanza: *“ahora las calles se llenarán de gente desnuda”*, dijo. O como las realizadas por la oposición al Ayuntamiento de Tarifa: *“todas las playas han sido declaradas nudistas”*. Pero aparte de estas declaraciones más o menos alarmistas, no pasará nada. Pasará, eso sí, que veremos de nuevo lo que hemos visto en la página 9 del BOP de Cádiz del día 19 de julio de 2010 en cuanto a las playas de Tarifa: un punto como el Art. 13 en el que se dice “se suprime la parte final de este artículo que prohibía la práctica del nudismo, quedando el resto del artículo con la misma redacción”, y eso será todo.

Pero si el Tribunal falla en contra de nuestros argumentos, probablemente algunos colectivos nudistas pedirán la señalización de todas las playas consideradas de tradición Naturista, y se exigirá el desnudo obligatorio y la sanción y expulsión de los que acudan con ropa; El colectivo “playas familiares”, que viene pidiendo a los Ayuntamientos playas para “familias católicas”, con padre y madre, y donde la vestimenta sería muy estricta (no *top-less*, no tangas, no bañadores tipo slip,...), tendría base legal para obtenerlas, al menos en toda



Andalucía, y no pocos Ayuntamientos estarían dispuestos a concedérselas de inmediato; Y si los nudistas y las familias “católicas” pueden reservar playas, al cada vez más numeroso colectivo musulmán habría que destinarles playas separadas por género, y en las de las femeninas obligar al uso del *burkini*, como ya han pedido y se les ha denegado en las piscinas públicas de Ceuta; y todo ello bajo multa y desalojo con objeto de respetar la educación que las familias musulmanas desean para con sus hijos.

En definitiva, se dañaría la pluralidad y diversidad que a fecha actual estaban perfectamente inalteradas, como no se puede esperar menos de un Estado democrático y Social de derecho; y se otorgaría carta de naturaleza a una Corporación Local para entrar a regular materias y actitudes fuera de su competencia y de la legalidad, produciendo agravios comparativos a todas luces inaceptables, llegando incluso al absurdo como acabamos de exponer.

CUARTA.- Señalado todo lo anterior, cabe por concluir sobre las CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DE LA ORDENANZA RECURRIDA

El Ayuntamiento de Cádiz debería saber que las últimas multas por estar desnudo en una playa se pusieron en los años 80. Precisamente para evitar que se pudiera poner ni una sola multa más, intervinieron nuestros legisladores aboliendo el delito de escándalo público del CP.

La evolución de los hechos se puede seguir con facilidad a través de los periódicos de la época (ejemplo, *El País* del 24/06/1984

http://www.elpais.com/articulo/espana/GALICIA/pecado/desnudarse/elpepiesp/19840624elpepinac_6/Tes/)

“Los portavoces del Grupo Popular le preguntaron al alcalde por qué no se legalizaba también una playa para gays, otra para negros, etcétera” y “La experiencia de Baroña terminó con el procesamiento de 14 nudistas, que fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Porto do Son y luego al de Santiago de Compostela, a 50 kilómetros, «donde nos tomaron fotografías y nos midieron los pies, aun no sabemos para qué». Otros seis nudistas detenidos en la playa de Barra, en Cangas de Morrazo, fueron juzgados por la Audiencia Provincial de Pontevedra, que los condenó a un mes y un día de arresto, multa de 20.000 pesetas y seis años y un día de inhabilitación profesional.



El Tribunal Supremo denegaría el recurso de una joven pontevedresa en una histórica sentencia en la que se califica el nudismo como «ese retorno a tiempos edénicos anteriores al pecado original». Conocido el fallo, los pioneros gallegos del nudismo **reiteraban sus peticiones legislativas en un telegrama al Gobierno**”.

El Congreso de los Diputados se hizo eco de estas peticiones que con el tiempo se concretarían en la Proposición de Ley Orgánica de derogación de los artículos 431, 432, 239 y 566.5 del Código Penal, del 17 de marzo de 1987 (http://www.congreso.es/public_oficiales/L3/CONG/BOCG/B/B_057-01.PDF) en la que se iba por fin al fondo del asunto: el problema estaba en la existencia del delito de escándalo público y por tanto la solución no era delimitar playas para nudistas, gays o negros, como señalaban en su día los portavoces del grupo popular, con acierto. La solución era abolirlo.

Es claro, por tanto, que la retirada propuesta en el 87, llevada a cabo en el 88 y ratificada en el nuevo CP del 95, obedeció también a la necesidad de impedir que nadie pudiera ser obligado a vestirse en ningún sitio público, y menos aún en una playa. Y es por tanto evidente que el Ayuntamiento de Cádiz con su ordenanza deja en papel mojado toda esa evolución legislativa, violentando profundamente el sentido y los motivos que llevaron a la abolición de este delito y haciendo burla del Congreso de los Diputados al anular mediante una simple Ordenanza lo que el Congreso aprobó mediante Ley Orgánica.

El Ayuntamiento debería saber que este asunto ya se resolvió en los 80 y quedó zanjado con los cambios que se acometieron en el CP.

En el citado Boletín de las Cortes se dice:

“las penas servían «para el vivir pacífico de los españoles y la eficaz sanción de la ley para los que se aparten de las reglas de la moralidad y rectitud, que son norma de toda sociedad iluminada en su marcha a través de la Historia por los reparadores principios del Cristianismo y del sentido católico de la vida». **La expuesta es la tradición de que es portadora la figura del escándalo público, radicalmente incompatible con un orden democrático y pluralista como el que la Constitución consagra como mandato del legislador”**



Por eso, para evitar multas y consiguientes sentencias basadas en el delito de escándalo público, el 9 de junio de 1988 nuestras Cortes derogaron este delito mediante Ley Orgánica en la que se estableció la modificación de los artículos 431 y 432, limitándolos a delitos sexuales ante menores, y se derogaron los artículos 239, 566.5, 567.1 y 3 y 577.1 del CP. Posteriormente, en el CP de 1995, el actual, el artículo ha devenido en el 185 y se ha situado dentro del Título VIII “Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales”, y castiga “El que ejecutare o hiciera ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante menores de edad o incapaces”. **Ley o leyes Orgánicas que quedan ahora anuladas mediante una simple Ordenanza del Ayuntamiento de Cádiz.**

El Ayuntamiento debería saber todo lo antedicho, pero lo que es claro, a la vista del escrito de contestación, es que el Ayuntamiento sí sabe que sólo y en todo caso se podría actuar para limitar las libertades ciudadanas cuando impliquen poner en peligro la integridad **física de las personas**, o por razones de salubridad o medioambientales, pues así queda recogido en todos los ejemplos que el propio Ayuntamiento nos brinda (deportes de pelota, vuelo de cometas, higiene) y en todos los que no ha citado aún y que seguramente añadirá en respuesta a este escrito (animales, música alta,...).

Y porque lo sabe y no ha retrocedido al ser detalladamente informado, como así lo hicieron los otros Ayuntamientos citados, podemos afirmar que nos hallamos ante un caso de contumacia que provoca perjuicios a los ciudadanos y hace perder tiempo y recursos a la Administración y a este alto Tribunal. Es por ello que **solicitamos una ejemplar sentencia** que impida desmanes futuros de este y otros Ayuntamientos. Una sentencia que inste al Ayuntamiento a incluir en los planes de formación de los agentes locales la obligación de proteger todas las formas de “estar” (como dice la CE y el art. 31.1 de la Ley de Costas) en las playas, identificando correctamente a quien altere el orden público, que, como todos sabemos, no suele ser alterado por la desnudez y en caso de alteración no suele ser la persona que ha optado por no usar ropa para bañarse quien lo altera.

La legalidad debe ser restablecida y el Ayuntamiento de Cádiz debe volver cuanto antes a la misma senda de racionalidad que se disfruta en el resto de los Ayuntamientos de Andalucía.



Por todo lo expuesto,

SUPLICO A LA SALA: tenga por presentado este escrito, lo admita y previos los trámites legales oportunos, **tenga por efectuado el correspondiente escrito de conclusiones, y se declare ajustada a derecho la pretensión solicitada**, teniendo en cuenta la incidencia de los intereses afectados y circunstancias concurrentes. Y siguiendo el procedimiento por todos sus trámites se dicte sentencia en la que se declaren contrarios a derecho los puntos impugnados con expresa imposición de costas al Ayuntamiento de Cádiz.

Es Justicia que pido en Valladolid a 1 de septiembre de 2010.

FDO.: Ana I. González Chao
(Coleg. 2572)

FDO.: Jaime Cox Meana
(Procurador)